Salvador Allende armado 9/23/08 3:14 PM Page 160

# Integración para el cambio\*

Ahí, en Punta del Este, se está tratando de revivir el fantasma de la Alianza para el Progreso. Se está preparando la nueva consigna publicitaria para engañar a los pueblos del continente, abusando de la alta dosis de analfabetismo en que se les ha mantenido sepultados.

La Alianza para el Progreso, como lo anticiparon los espíritus lúcidos de América Latina, nació muerta. Sólo vivió en la esperanza de nuestros pueblos que, engañados, creyeron que ella les significaría ocupación, alimento, techo, salud, seguridad social, educación, cultura y esparcimiento. Hace seis años, en 1961, en este mismo lugar de Punta del Este, los encargados de los diversos gobiernos del continente practicaron un descarnado recuento de la miseria de América Latina, para extender la mano en pos de la propina. Y en el terreno político se puso el acento en la "democracia representativa".

Cinco años después, uno de los agentes encargados de manejar ese plan publicitario que pasó a ser en la realidad la Alianza pa-

<sup>\*</sup> Conferencia en la Universidad de Montevideo, paralela a la reunión de la Alianza para el Progreso, 13 de abril de 1967, fragmentos.

ra el Progreso, el economista brasileño Rómulo Almeida, al renunciar a su cargo de "supersabio", de la conocida nómina de "Los 9 sabios", estableció en un documento dirigido al Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) de la OEA:

"Al sumarse este nuevo hecho a ciertos antecedentes, se justifican las sospechas de que la independencia del Comité —se refiere a la nómina de los nueve— usada para elaborar recomendaciones y opiniones incómodas para la actual política oficial del Departamento de Estado, había dejado de ser tolerable no obstante estar inspirada por la idea de cumplir con la carta de Punta del Este y, de esa manera, mejorar el papel y la imagen de los Estados Unidos en el continente."

Ese fue el único y verdadero papel de la Alianza para el Progreso. Mejorar la imagen de los Estados Unidos en el continente, después de que éste había conocido la Revolución cubana con el más demostrativo de los ejemplos.

América Latina perdió la esperanza que le hizo alentar la publicidad de la Alianza para el Progreso. Eso lo saben sus creadores. Toman conciencia, a través de las múltiples encuestas que hacen en el continente, y con las cuales perforan la vida privada y la intimidad de los ciudadanos, de que América Latina se halla decepcionada. La frustración aparece, desnuda, ante los ojos de todos los observadores honestos.

Este fenómeno de descapitalización de su prestigio es muy grave para la política del actual gobierno de los Estados Unidos. Comprueba que Europa se halla también decepcionada. El gobierno del presidente Johnson sabe que en la Alemania Federal —otrora aliada suya incondicional— se opera una transformación que la aleja de su lado. Sabe que las tropas de la OTAN debieron abandonar Francia. El vicepresidente de los Estados Unidos se ha familiarizado en su gira europea con el clamor que es uno de los símbolos de nuestra hora: Yankee, go home.

Pero el gobierno de los Estados Unidos requiere en la actualidad el apoyo de los aliados incondicionales, porque afronta la crítica universal por su agresión al pueblo de Vietnam.

Lo que ocurre aceleradamente suscita un problema interno al presidente texano y que se encuentra ante un veredicto próximo de las urnas —el año venidero— en sus pretensiones de resultar reelecto.

Johnson necesita apoyo y espera encontrarlo en los gobernantes de América Latina. Por eso ha preparado la reunión de Punta del Este.

Por eso, el gobierno de los Estados Unidos ha aceptado rodear con un halo de esperanza la reunión política de Punta del Este. Eso explica la agenda de seis puntos, entre los cuales se encuentra uno que es el símbolo del fariseísmo moderno: la limitación de armamentos "innecesarios". ¿Cuáles serían los necesarios? Sólo aquellos destinados a reprimir los movimientos de protesta de los pueblos. Es decir, armas para las "fuerzas especiales", entrenadas por el Pentágono para aplastar a los campesinos que piden tierra y pan; para arrasar a los obreros y empleados que exigen mejores salarios; para aniquilar a los pueblos que aspiren a conquistar su independencia. Para esas fuerzas especiales, sí que habrá armas; pero no para que los ejércitos cumplan con la función para la cual fueron creados desde los albores de la historia: para defender la soberanía de los países.

La historia de esta reunión de Punta del Este es torva como toda la historia de la Organización de los Estados Americanos. Tiene sus orígenes en el viejo y negociado principio: "Doy para que me des." En julio de 1954, Estados Unidos derribó al gobierno constitucional de Guatemala. En diciembre de ese año, Estados Unidos convocó a los gobiernos latinoamericanos a una reunión económica, para cubrir con esperanzas el delito cometido.

El 13 de marzo de 1961, Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso. El 16 de abril, el gobierno de Estados Unidos intentó invadir Cuba. En agosto, ese mismo gobierno ofreció la Alianza para el Progreso para ocultar el crimen fracasado.

En abril de 1965, el gobierno de Estados Unidos agredió al pueblo dominicano. En noviembre de 1965, ese mismo gobierno aceptó, en la conferencia de la OEA de Río de Janeiro, que se introdujeran modificaciones económicas a la Carta de los Estados Americanos.

En 1967, el gobierno de Estados Unidos pidió a los gobiernos latinoamericanos que instalen una fuerza policial contra sus pueblos: "la Fuerza Interamericana de Paz", impetrando, además, apoyo para su agresión en Vietnam. A cambio de todo esto, ofre-

ce la actual reunión de Punta del Este en la que enuncia una nueva esperanza publicitaria: la integración económica.

Hace seis años en Punta del Este se proyectó la Alianza para el Progreso. Seis años después podemos hacer un amargo recuento económico, social y político del continente.

Se planteó la Alianza como un esfuerzo conjunto para mejorar rápidamente las condiciones de vida de la población y acelerar el ritmo de crecimiento económico de los países latinoamericanos, y hasta se firmó el compromiso de alcanzar metas mínimas de crecimiento de 2,5 % anual en el ingreso por habitante.

En los hechos, no sólo se ha estado muy lejos de cumplir esa meta, que no era nada de espectacular, sino que además, en lugar de acelerarse, disminuyó sustancialmente el ritmo de crecimiento económico.

Las cifras de la CEPAL revelan que la tasa de aumento del producto por habitante fue de 2,5 % como promedio anual en el período 1950-1955: disminuyó a 1,8 % en 1955-1960, y desde que se puso en marcha la Alianza se redujo todavía más, resultando de apenas 1,3 % como promedio en los años 1960-1966.

Invito a meditar sobre estos datos que son lapidarios.

Desde que se puso en vigor la Alianza, América Latina ha avanzado económicamente a uno de los ritmos más bajos de este siglo.

Poco, muy poco, ha podido así ganar la población latinoamericana, y algunos sectores, incluso, han empeorado visiblemente su situación. Por ejemplo: se estima que en 1960 el desempleo abierto y disfrazado, en forma de servicios marginales, afectaba a dos millones de personas, en tanto que en 1965 afectaba a 3,2 millones de trabajadores americanos, cifra que no ha disminuido en 1966. También esta comprobación es tremenda.

¡Desolador recuento después de seis años de ebriedad publicitaria! Veamos otro antecedente: antes de la Alianza, en el período 1951-1960, la entrada neta de capitales extranjeros llegó a un total de 11.400 millones de dólares; pero, en el mismo período, las salidas por el pago de intereses y utilidades de empresas extranjeras representaron 11.000 millones de dólares, de manera que en esos diez años el aporte neto de los capitales extranjeros no llegó a los 400 millones de dólares. Pero hay un hecho más grave todavía, si ello es posible. Durante ese lapso, América Latina perdió,

por el empeoramiento de los términos del intercambio, más de 9.000 millones de dólares.

La Alianza no mejoró sino, por el contrario, empeoró aún más este cuadro. En los cinco años comprendidos entre 1961 y 1965 —plena vigencia de la Alianza—, las entradas netas representaron 6.800 millones de dólares, mientras las salidas por intereses y utilidades fueron más de 8.000 millones de dólares.

Nuestra dependencia del imperialismo norteamericano nos impide el acceso a un comercio mundial más amplio y más significativo.

La Alianza para el Progreso no ha reportado más ayuda financiera para nuestro continente. Tampoco ha implicado mayores oportunidades de participación en el comercio mundial y ni siquiera en el mercado de Estados Unidos.

Así, en 1961, al inicio de la Alianza, los productos latinoamericanos representaban 27,7 % de las importaciones totales de Estados Unidos; en 1966, no llegaron a representar 16 %.

En ese mismo período, se produjeron aumentos considerables de la participación de todas las otras áreas poco desarrolladas en el comercio mundial y, en especial, se amplió enormemente el comercio exterior de los países socialistas. Pero América Latina no se beneficia en nada con tal expansión y su cuota representa cada vez menos en el comercio internacional.

Si se hubiera mantenido la participación en ese comercio que tuvimos en 1961, ello habría representado muchos millones de dólares más de ingresos por exportaciones, sin endeudamiento y sin entreguismo a los intereses norteamericanos.

Nada cambió en este período de la Alianza. Se nos compró menos, se nos pagó peor y se nos siguieron imponiendo las mismas condiciones colonialistas de otras épocas.

Más sombrío se torna el panorama de este continente si proyectamos la miseria de hoy hacia el futuro. Advertimos cómo se distancian estos pueblos nuestros de las naciones desarrolladas, en las cuales la tecnología y la ciencia provocan diariamente avances notables.

¿Qué va a pasar a nuestros pueblos, a Latinoamérica potencialmente tan rica, promisoria y fecunda, si continúan los mismos ín-

dices de producción y las mismas relaciones del intercambio que hemos señalado? Veamos.

En 1900 éramos 60 millones de habitantes.

En 1958 éramos 158 millones.

En 1965 éramos 230 millones.

En 1970 seremos 365 millones, y en el 2000 seremos 638 millones de habitantes.

Hoy, 60 % del pueblo latinoamericano tiene déficit cuantitativo y cualitativo en su alimentación. Faltan proteínas, grasas, vitaminas. La FAO afirma perentoriamente que debemos aumentar en 200 a 300 % la producción agrícola.

De los 230 millones que somos ahora, 170 millones comen menos o mucho menos que lo indispensable; 115 millones son analfabetos o semianalfabetos y sufren enfermedades endémicas. Y, aunque parezca extraño, millones y millones desconocen la moneda.

El crecimiento económico apenas cubre el incremento demográfico. Hay cada vez menos pan para un número cada vez mayor de bocas. La FAO, organismo de las Naciones Unidas, afirma en trabajos recientes que la producción de alimentos por persona, para el consumo interno, en América Latina es inferior a la de preguerra y desde 1959 acusa un descenso continuo, que en el año 64 se estimó en 8 %.

Hoy somos 230 millones de habitantes y el continente tiene un déficit de más de 14 millones de viviendas. ¿Qué sucederá cuando seamos 360 ó 630 millones? Sabemos que ningún país latinoamericano construye en relación con el aumento vegetativo de su gente.

Hoy tenemos tres millones de cesantes. ¿Qué va a acontecer en el año 1970 o en el año 2000, si no se aumentan las posibilidades de trabajo o de ocupación? Estos son interrogantes que tenemos derecho a plantearnos. Esta es la dramática perspectiva que se puede vislumbrar.

La explosión demográfica, forma de autodefensa de los pueblos, nos señala lo siguiente: cada cinco segundos surge un habitante nuevo y, diariamente, 17.280 habitantes.

La natalidad varía de 3 a 7 %.

17.280 nuevos habitantes diariamente. ¿Bastará con planificar la familia? Rotunda y categóricamente decimos: "no".

Estamos en el umbral del desarrollo. Sin poder cruzarlo para ingresar al mundo actual de la era, precisamente, del desarrollo.

Veamos qué es lo que ingresa al "haber" Estados Unidos, en este balance de sus relaciones con América Latina.

No son hoy menores que antes el número y la magnitud de las empresas extranjeras que explotan nuestros recursos naturales y envían al exterior enormes utilidades que se sustraen de los recursos que podrían aplicarse a nuestro desarrollo interno. El año recién pasado, esas remesas de utilidades de empresas extranjeras representaron más de 1.500 millones de dólares, suma declarada y muy inferior a las utilidades reales, ya que resulta después de dudosos manejos contables sobre depreciaciones, gastos en el exterior, sueldos y gratificaciones del personal extranjero que ocupa los cargos directivos, etcétera.

Los préstamos, que se representan como contribución "generosa" del capital extranjero, dieron lugar en 1966 al pago de intereses —entiéndase bien, sólo de intereses, no de amortizaciones—por un monto cercano a los 160 millones de dólares. O sea que los beneficios declarados en forma de intereses y de utilidades de las inversiones extranjeras fueron en 1966 superiores a 2.100 millones de dólares.

Pero eso no es todo. Cuando los mismos intereses controlan directa o indirectamente los mercados mundiales, deciden sobre los precios de nuestros productos de exportación y los precios de los productos que tenemos que importar, la dominación imperialista se hace sentir con más fuerza a través del deterioro de los términos de intercambio de nuestro comercio exterior. Por esa vía, buena parte del esfuerzo de nuestros campesinos, de nuestros obreros de la minería y otras actividades, por aumentar la producción, no se traducen en mayores ingresos disponibles para nuestros países sino que se transfieren a la potencia imperial. Los estudios técnicos disponibles concluyen que, en relación a la situación de precios existentes en 1950, las pérdidas por el deterioro de la relación de intercambio representaron para América Latina más de 9.000 millones de dólares en el período 1951-1960, y más de 12.000 millo

nes de dólares entre los años 1961-1966. Qué absurdo aparece frente a cifras de esa magnitud el regateo que ha precedido a esta reunión de presidentes para lograr 1.500 millones de dólares de "ayuda" norteamericana a la integración latinoamericana en un plazo de cinco años.

Todavía subsiste en algunos de nuestros países la autoridad abierta de la empresa extranjera en la plantación, el centro minero o la explotación petrolífera; en otros casos, su autoridad aparece disfrazada en dudosos arreglos de "empresas mixtas", de asociaciones con el capital nacional forzadas por la misma presión imperialista; y en muchos casos, como concesión a los símbolos de modernidad, se ha reemplazado la autoridad abierta del capataz de plantación por la autoridad delegada en el inspector del Fondo Monetario Internacional, representante moderno pero no menos auténtico de los mismos intereses.

En este balance entre el deber y el haber, se ha llegado a un punto conflictivo, que yo quiero denunciar en esta alta tribuna. América Latina alcanzó ya un nivel de saturación como continente deudor. Ya nada gana, en pro de su deseo de marchar hacia el desarrollo económico, con recibir recursos externos en calidad de préstamo.

El imperialismo ha conseguido su objetivo. Ha llevado a muchos países latinoamericanos a una situación tal de endeudamiento acumulado y de compromiso con esas deudas, que los ha metido en el círculo vicioso de tener que pedir nuevos préstamos para pagar los anteriores aumentando de nuevo la deuda acumulada.

No hay que forjarse ilusiones respecto a esto. Nuestros países han llegado a un punto en que ya no les sirven nuevos recursos externos, en que no pueden esperar ningún aporte neto para financiar su desarrollo de un endeudamiento mayor.

Pienso que no habría ahora mejor colaboración que la de que no se nos diera un dólar más de préstamo, pero que se suspendieran al mismo tiempo el servicio de la deuda acumulada y la salida exorbitante de las utilidades de las empresas extranjeras.

Las soluciones hay que buscarlas ahora por otros caminos. Por los caminos estructurales y el esfuerzo interno; por condiciones distintas del comercio internacional y de los países de nuestros pro-

ductos exportables. Ahí está el verdadero problema de las relaciones económicas externas y de los recursos para aumentar nuestro ingreso y repartirlo equitativamente entre los distintos sectores de la población.

Todo esto viene a agregarse a las sucursales que de estos bancos tienen en nuestros países y a las sociedades financieras y fondos de inversión que dependen de ellos, como Inversiones Esso, de Colombia, los Fondos Crecinco de Brasil, Chile y otros países, etcétera.

Esta nueva forma de penetración tiene una finalidad bien clara: los consorcios estadounidenses, que son dueños de gran parte de la industria automotriz, de la petroquímica, de la industria de maquinaria eléctrica y de muchas otras, tendrán ahora también los mecanismos financieros para facilitar el funcionamiento de esas empresas. Con los recursos provenientes de los ahorros y depósitos de los latinoamericanos, esos organismos financieros podrán otorgar préstamos a las empresas de Estados Unidos que operan en nuestros países.

De esta manera, nuestros países empobrecidos y sujetos al subdesarrollo estarán prestando ayuda financiera a los grandes consorcios norteamericanos que nos explotan.

Nosotros recogemos la vieja herencia de quienes compartieron sus afanes y luchas entre la unidad latinoamericana y el mejoramiento económico y social de sus respectivos pueblos. Estamos, pues, sin reservas a favor de la integración. Es más, creemos que esa antigua aspiración sólo podrá ser realidad efectiva cuando se modifiquen las condiciones políticas que hoy predominan en América Latina y la capacidad de decisión esté, efectivamente, en manos de la mayoría de la población de cada país y, en consecuencia, pueda decidirse por encima de los privilegios e intereses creados.

Pero apoyar la idea de la integración latinoamericana no significa aceptar cualquier camino, cualquier mecanismo. Porque lo que nos interesa no es la integración en sí misma sino la integración como un medio, entre otros, para acelerar el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población de cada uno de nuestros países.

Por eso, porque tomamos como punto de partida preocupaciones fundamentales, es que no podemos aceptar, indiscriminadamente, cualquier esquema de integración. Debemos antes confrontarlo a preguntas que para nosotros son esenciales: ¿En favor de quiénes se hará la integración? ¿Cómo se relacionan los esfuerzos de integración con las reformas estructurales que urge emprender en cada uno de nuestros países? ¿Se trata de una integración para reafirmar una personalidad propia e independiente de América Latina o para subordinarla más a uno de los bloques?

De aquí partimos nosotros, y es en el contexto de esas preocupaciones esenciales que surgen nuestro desacuerdo y nuestra oposición a lo que se ha planteado en Punta del Este.

Comencemos por reconocer el hecho de que el único paso concreto que se ha dado hasta ahora ha sido el establecimiento de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, aparte de los arreglos especiales que han venido acordando los países centroamericanos. El Tratado de Montevideo, que estableció la ALALC, constituye un reflejo de cómo entienden la integración y hasta dónde están dispuestos a llegar los actuales grupos dominantes. Pues bien, ha transcurrido ya tiempo suficiente como para comprobar hasta qué punto la idea de la integración ha sido disminuida en un cuidadoso afán de no tocar ningún interés creado importante.

No se ha mirado al futuro de una América Latina para que se desarrolle rápidamente y ofrezca cada día mejores condiciones de vida a sus pueblos. Por el contrario, la preocupación principal se ha puesto en "liberalizar lo esencial del intercambio tradicional", es decir, en las pequeñas fórmulas para hacer más fácil un comercio escuálido, de manera que no entre en conflicto con el mantenimiento del estatus en cada país.

A las negociaciones periódicas, de las listas en que se acuerdan las pequeñas concesiones recíprocas, no se llega con el criterio abierto de encontrar las cosas que pueden ofrecer más beneficio común, sino con las exigencias de los grandes intereses agrícolas y los monopolios industriales de que no se toquen sus privilegios.

Quien quiera ver las cosas objetivamente tendrá que arribar a una conclusión bien clara: por el camino de la ALALC no se llega-

rá a la integración latinoamericana. Se lograrán entendimientos donde no haya contraposición de privilegios o donde pueda compensarse, generosamente, el interés privado que se afecte. El comercio entre los países de la región podrá pasar, por ejemplo, de un tres a un seis por ciento de su comercio global, pero de allí a una integración efectiva hay un abismo, que en el actual esquema político latinoamericano resulta insalvable.

No es difícil anticipar lo que ocurrirá si en estas condiciones se quisiera romper el estancamiento de la ALALC e imitar con más audacia el Mercado Común Europeo.

En primer lugar, la falta de capacidad de acción propia de los empresarios latinoamericanos dejará abierto el campo de las industrias de integración a las inversiones privadas extranjeras, cuya posición dominante se verá seriamente reforzada. Como no habría barreras al comercio dentro de la región, la localización de estas inversiones dependerá más que nada del trato tributario y otros privilegios que ofreciera cada país, con lo que nos veríamos enfrentados en una carrera entre los distintos países por ofrecer condiciones cada vez más favorables a la inversión extranjera.

Esto probablemente obligaría a uniformar el trato a la inversión extranjera, pero sería ilusorio que en el establecimiento de esas condiciones comunes no serían las propias empresas extranjeras —directamente o a través de otros mecanismos de presión—las que en definitiva impusieran sus privilegios. Nos acercaríamos, pues, a la integración, pero no para beneficio de las empresas latinoamericanas, sino del capital foráneo.

Enfrentados a la competencia entre sí, los empresarios de los distintos países tratarían, naturalmente, de defenderse reequipando y modernizando sus instalaciones tradicionales. Bajo otras condiciones, esto sería positivo; pero en las actuales condiciones latinoamericanas significaría canalizar todos los recursos hacia una modernización prematura de la industria tradicional, perdiendo toda posibilidad de establecer nuevas líneas industriales y en consecuencia diversificar nuestras economías.

Corolario lógico de lo anterior sería el agravamiento drástico del problema ocupacional.

La modernización de la industria significará disminuir la ocupación actual, sin que al mismo tiempo se creen nuevas fuentes para absorber la mano de obra que se desplazaría.

Por eso nosotros no podemos desvincular el problema de la integración de otro que nos parece fundamental: el de los cambios estructurales que es urgente emprender dentro de cada país latinoamericano.

Hay que jerarquizar y dar a la integración su sitio justo dentro del conjunto de los problemas básicos de América Latina. Esto hay que decirlo claramente, porque muchas opiniones interesadas quieren hacer aparecer la integración como una panacea que solucionará todos los problemas. Con argumentos falaces se está engañando a la opinión latinoamericana.

Se repite con majadería que nuestros mercados internos son muy pequeños y que, en consecuencia, no podemos progresar sin arreglos que permitan trabajar para mercados más amplios, exigencia que, según esas opiniones, sólo podrá satisfacerse por medio de un mercado común regional.

Nosotros no aceptamos verdades a medias como ésta. Porque, si bien la asimilación del fabuloso progreso técnico que se da en el mundo de hoy irá exigiendo escalas de producción cada vez más amplias, la magnitud de los mercados nacionales no es invariable y no es un hecho con el que hay que contar como fatal y que no pueda modificarse. Cuando se piensa en la decena de millones de latinoamericanos que hoy apenas si tienen acceso a manufacturas elementales, cuando se piensa en el tremendo mercado potencial que significan nuestros campesinos y la población marginal de las grandes ciudades, cuando se reflexiona sobre tantas legítimas aspiraciones de bienestar material que no puede satisfacer la clase media, no puede aceptarse que la magnitud del mercado interno esté ya dada. Por el contrario, hay que decir claramente que, para muchos, la integración es la forma de atender con más eficiencia las demandas superfluas de pequeños sectores de altos ingresos, o de abrir perspectivas a una que otra gran empresa industrial, pero no la forma de elevar sustancialmente los niveles de vida de las grandes masas de nuestra población.

¡No queremos una integración para evitar el cambio y fortalecer temporalmente la situación injusta que hoy existe!

¡Queremos una integración al servicio del cambio, como un instrumento más que lo apoye y lo facilite!

La integración económica constituye una antigua aspiración de muchos sectores, incluso, por cierto, de los partidos populares del continente.

Pero esta integración —esta que ahora se impulsa en Punta del Este— no la aceptamos, porque tiene las huellas digitales del gobierno de Estados Unidos, y por lo tanto constituye otra maniobra del imperialismo, es otra consecuencia de ese flagelo que azota a nuestros débiles ecónomos.

Yo no estoy haciendo una suposición. Por el contrario, me baso en un documento que, con el carácter de confidencial, envió el 31 de enero del año en curso, a los cancilleres latinoamericanos, el embajador de Estados Unidos en la OEA, Sol Linowitz.

En el párrafo uno del documento de Linowitz, titulado "Integración Económica Latinoamericana", se lee:

"Los presidentes afirmarían la finalidad de hacer del decenio de 1970 a 1980 un período de integración económica latinoamericana estableciendo tan pronto como sea posible un mercado común en que participen todos los países de la América Latina."

No se trata de meros consejos. Parecen más bien "instrucciones" para los presidentes latinoamericanos.

Veamos con cuánta facilidad han respetado las "instrucciones" los presidentes latinoamericanos. En el punto uno de la agenda definitiva de la Conferencia de Punta del Este, se lee:

"A tales fines, los presidentes de las Repúblicas latinoamericanas hemos acordado tomar acción sobre los siguientes puntos:

a) Crear en forma progresiva, a partir de 1970, el Mercado Común Latinoamericano, que deberá estar sustancialmente en funcionamiento en un plazo no mayor a 15 años."

Como puede apreciarse, el actual concepto de la integración latinoamericana es una receta que viene de América del Norte.

Hace 10 años, ningún gobernante de Estados Unidos apoyaba tal proceso. ¿Es que acaso Estados Unidos ha descubierto que es mejor ayudar sinceramente a América Latina?

Nada de eso. Estados Unidos ya encontró el medio de aprove-

char en beneficio propio el proceso integrador. Por eso no sólo lo recomienda, sino se apresta a imponerlo.

En un momento, Estados Unidos temió que la integración latinoamericana le crease los mismos problemas que le ha suscitado el Mercado Común Europeo. Ahora, ha descubierto una nueva fórmula para el afianzamiento de su poder económico en el continente. Y, por lo mismo, no le asusta el proceso.

La nueva fórmula es clarísima. Se trata de las asociaciones del capital imperialista con los intereses de nuestros países, ya sea que estos se expresen mediante organizaciones del Estado o aun de empresarios privados. Pero la vinculación con el Estado es la más frecuente, por corresponder tales asociaciones a negocios de tremenda importancia para el país de que se trate.

A través de la asociación, el capital americano consigue:

- 1. Protección para sus intereses, a través de un apoyo directo que los gobiernos prestan a los empresarios privados.
- 2. Descartar las nacionalizaciones.
- 3. Obtener utilidades sin riesgo de ofrecer blanco a las críticas de los sectores nacionalistas y socialistas.

Para incrementar la ilusión y el optimismo en los latinoamericanos sobre las ventajas de tales integraciones, se esgrimen argumentos como este: los países latinoamericanos, con pocas excepciones, tienen mercados internos pequeños, de manera que sus industrias, por su tamaño también reducido, acusan costos altos. Si en vez de instalar varias plantas pequeñas en distintos países se instala una de vastas dimensiones para abastecer al conjunto de ellos, se obtienen costos más bajos. Y para que todos los países puedan aprovechar tales ventajas, será necesario llegar a acuerdos que permitan eliminar las barreras aduaneras que los separan.

La realidad no es así: en Costa Rica, antes de que se instalara el Mercado Común Centroamericano, existía una fábrica pequeña de cemento, que apenas se defendía en un mercado reducido. Con el Mercado Común pudo ampliarse, porque su fuente de consumo pasó a estar integrada por toda América Central. Pero hoy esa fábrica es norteamericana.

En los últimos años, la penetración norteamericana en América Latina ha alcanzado a las instituciones financieras, con lo que culmina el proceso de dominación económica.